





# Lo Local

# UNIVERSIDADES PÚBLICAS SIN GARANTÍAS PARA ENFRENTAR EL SIGLO XXI

Public universities have no guarantees to face the XXI century\*

*Manuel Humberto Restrepo Domínguez\*\**

\*Este texto sostiene una parte de su contenido en algunos textos originales presentados en columnas por el autor.

\*\*Profesor titular de la UPTC, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Ph.D en Derechos Humanos. PsD en Derechos Humanos y Economía. D.E.A. en Filosofía y Sociología del Derecho y Derechos Humanos. Especialista en Pedagogía de Derechos Humanos. Especialista en Administración Pública. Economista. Director Grupo Investigación en Derechos Humanos y Medio Ambiente.

## Resumen

Las universidades públicas colombianas no son ajenas al proceso privatizador que atraviesa la realidad global. Sus estructuras y partes constitutivas son permanentemente atacadas desde adentro de los mismos Estados, que por razones políticas y de enajenación de los bienes, privilegian el desmonte paulatino de su autonomía, condiciones y garantías de funcionamiento, aumentando el riesgo de separarse definitivamente del mandato para el que fueron creadas, es decir, para servir de base a la construcción de una nacionalidad crítica, afianzar la creación y la transformación de conocimiento con rigor científico, así como para mantener la igualdad de oportunidades de ingreso y permanencia para todos los jóvenes sin discriminaciones ni exclusiones. El texto sostiene parte de su contenido en columnas de análisis sobre la universidad pública, articuladas para presentar una lectura crítica sobre el sentido, el significado, las técnicas y los modos de acción tratados con herramientas de derechos humanos en perspectiva crítica.

**Palabras clave:** universidad pública, derechos humanos, ideologización, régimen privado, acreditación, legitimidad.

## Abstract

The Colombian public universities are also influenced by the privatization process that flows through the global reality. Their structures and constituent parts are constantly attacked from within the States themselves, which for political reasons and sale of assets, favor the gradual dismantling of their autonomy, conditions and guarantees of operating, increasing the risk of definitively separate the mandate to they were created, i.e. to serve as a basis both for the construction of a national critical as for the strengthening the creation and transformation of knowledge with scientific rigor, while maintaining equal opportunities of admission and permanence for all young people without discrimination or exclusion. Part of the text content is based in columns of analysis on public universities to present a critical reading about the meaning, significance, techniques and modes of action treated with human rights tools in a critical perspective.

**Keywords:** public university, human rights, ideological, private system, accreditation, legitimacy



## Introducción

Las universidades públicas entraron hace dos décadas en la autopista de la privatización y son conducidas cada vez a más alta velocidad hacia un precipicio sin retorno. Son empujadas a avanzar sin mirar lo que dejan a su paso y en ese tránsito va cambiando definitivamente su esencia, su sustancia y la razón de ser de su origen. Más de tres cuartas partes del mundo actual están dominadas por el gran negocio llamado mercado, en el que los derechos son convertidos en enemigos del capital y el capital es presentado como la nueva meca, el nuevo vaticano al que hay que mirar. En esta perspectiva se interpreta la situación actual de la universidad pública colombiana, que atenderá los retos del siglo XXI pensando no en el conocimiento sino en el mercado, y siendo tratada no conforme a la naturaleza del saber, sino a la naturaleza de la política contaminada de mercado. El texto aborda cuatro episodios, cuatro partes que a veces son técnicas y a veces son sentidos, pero que, en todo caso, obedecen a una misma estrategia global de control y posicionamiento de otras reglas, otros modos de acción y otros resultados. Los episodios están dispuestos en distintos lugares de la autopista por la que debe ir la universidad pública, desnuda, débil, sometida a riesgos y acechada por prácticas de mercado establecidas para liquidarla. El primero es el cambio de sus contenidos esenciales. El segundo, la ideologización de las cifras. El tercero, el asalto final que invalida toda causa hasta llevarla al mundo privado. El cuarto corresponde a las universidades sin agenda, sin políticas públicas de Estado, para someterlas al vaivén de los fracasos.

## Cambio de contenidos esenciales con el mismo cascarón

Hasta finales del siglo XX resultaba fácil describir e interpretar la totalidad de lo que ocurría en las universidades públicas de Colombia y, sobre todo, tener un relato colectivo más o menos común, saber de sus propósitos, de las relaciones e implicaciones solidarias con el entorno, de los modos de acción en la creación de conocimientos y libertades y de lo que defendían sus directivos académicos, para quienes el mandato de sus cortos períodos de gobierno provenía de adentro de ellas mismas, de sus estamentos, de sus inteligencias y de los resultados de las confrontaciones sobre las rutas a seguir y los modos de confrontar al Estado y defender su autonomía. Hoy no resulta fácil conciliar una mirada común entre los distintos sectores y actores universitarios y, menos aún, hacer coincidir las explicaciones e informes respecto a lo que ocurre. Una de las razones es la separación radical que se produce entre los órganos de administración que ya no atienden la naturaleza académica, es decir, cultural y científica de la universidad, sino que sobreponen el valor de la naturaleza política y electoral, validando una caricaturesca democracia aplicada por igual a lo científico y a lo político, con semejanza a lo que ocurre en los entes territoriales y, peor aún, en las empresas privadas cuyo fin es la acumulación de capital. Consecuentemente, la elección de metodologías para el análisis de datos dista de ser neutra y de tener en cuenta la cultura o el interés de la educación como derecho, la administración y los estamentos académicos reproducen el sistema de separación entre los intereses del Estado y los de la nación.

Son las reglas del mercado las que orientan, no siguen la naturaleza de los fenómenos de la ciencia, sino el interés por la gestión de resultados que de manera caótica crean dos mundos que se cruzan, uno donde las carencias estructurales se mantienen vigentes y otro en el que la realidad se nutre con datos que aprecian los equilibrios y desprecian los conflictos que son parte sustantiva de cualquier ámbito del conocimiento y las ideas. Parece haberse completado la mercantilización de las actividades, los servicios y los contenidos del derecho a la educación, que se inició con la multiplicación sin freno de la oferta de programas e instituciones, la precarización del trabajo docente y la apertura oficial de compensaciones y bolsas de competencia para la educación asumida como asunto rentable.

Las universidades públicas compiten con menos garantías que las privadas, son impulsadas a hacer negocios, producir excedentes y medirse con indicadores de gestión privada. Las administraciones han abandonado el interés por los procesos y privilegiado la medición de resultados para, a través de ellos, atraer beneficios y compensaciones del mercado, aun a riesgo de autoderrotar sus fortalezas. Algunas universidades parecen ajenas a las transformaciones sociales y políticas de sus entornos, del país y de la sociedad en general. Su exiguo papel es el de sobrevivir, reducidas a reproducir el sistema mercantil y adelantar acríticamente las orientaciones globales prediseñadas por las instituciones globales del capital como FMI, BM, OMC y ahora OCDE, todas ellas con alta injerencia y representación de los financistas globales y sus empresas transnacionales, para las que no cuentan los contextos, las culturas, las identidades, las soberanías, sino las riquezas materiales y sus garantías de saqueo efectivo.

Es evidente que los conceptos originales sobre los que pensaba y construía la universidad pública permanecen desocupados de sus contenidos, facilitando que se imponga otro modo de pensarlas y gestionarlas, basado en análisis ajustados a la concepción hegemónica de sus gobernantes, apoyados en staffs directivos, expertos y técnicos, que copan los espacios del debate público y la confrontación intelectual y, en cambio, promueven, alientan e imponen tanto la homogeneización como el alejamiento de la universidad de su condición política, filosófica y social, propia del escenario plural de las artes y las ciencias, del libre pensamiento, del diálogo y de la creación de conciencia social para la configuración de una nacionalidad crítica y soberana, como anunciaron las actas de fundación de las primeras universidades.

Los responsables de la gobernabilidad paulatinamente han abandonado el mandato recibido para afirmar el etos, la ética y la legitimidad que sostienen la raíz del concepto universidad. Algunas han caído incluso en autoritarismos desbordados, mediante los cuales tratan de perpetuarse creando sistemas de poder propios y han degenerado en corrupción y centralización de las decisiones en pequeños cuerpos de poder político totalmente controlados para favorecer el interés propio y reducir la democracia a mecánicas eleccionarias. Deshistorizar y desmemorizar el sentido

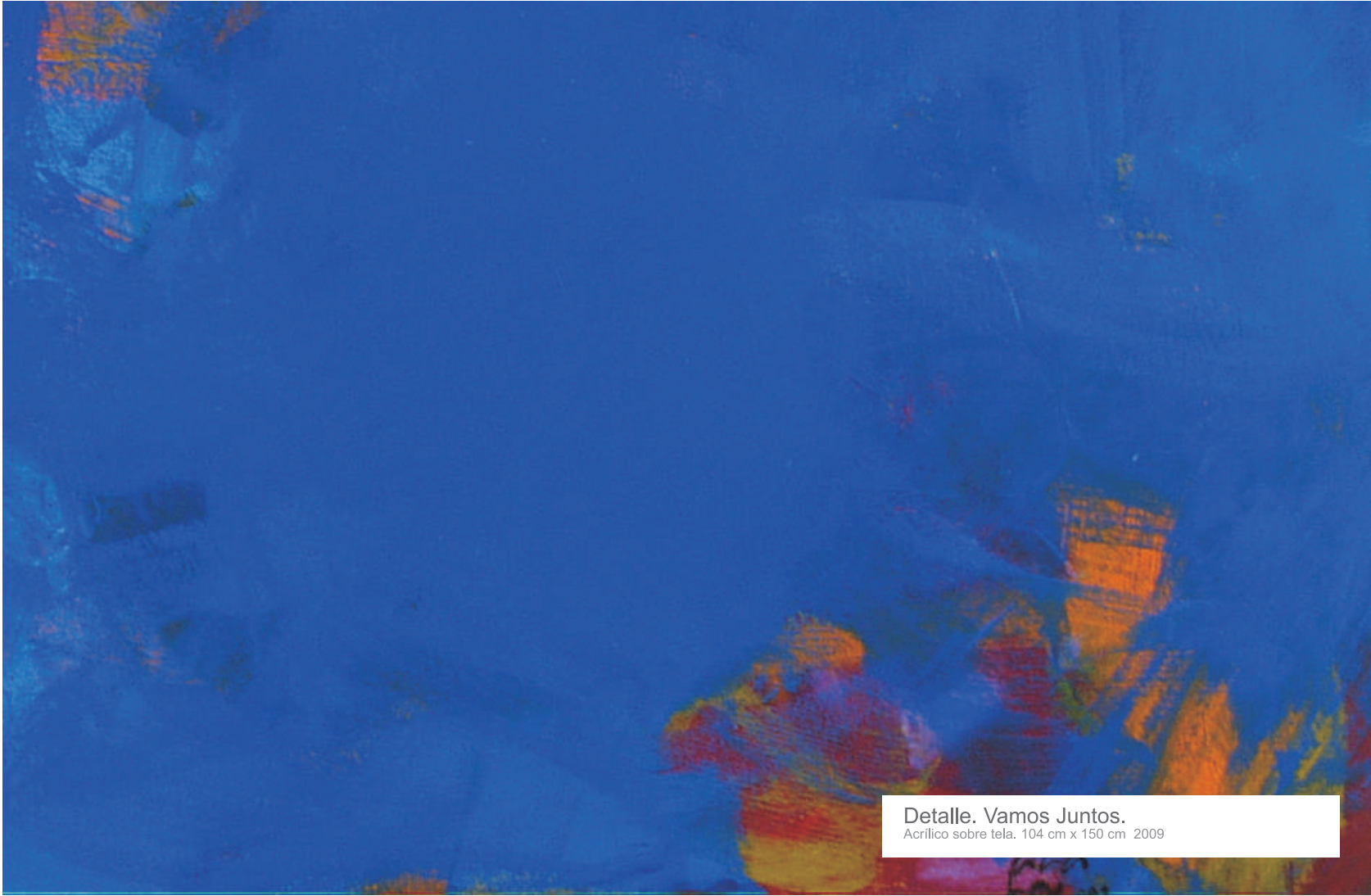




patrimonial de lo público para enajenarlo o modificarlo a su voluntad, son partes esenciales del proceso de globalización privatizadora, y las universidades públicas han sido arrastradas a hacerlo igual, conducidas por las disposiciones del mundo administrativo cuya tendencia es a aferrarse al poder con una lógica de organización de universidades-empresa, eficaces en indicadores de productividad y competitividad, mientras en el mundo de la academia los procesos de las artes, las ciencias y la humanización permanecen debilitados en sus capacidades para generar impactos de transformación de la realidad, en la que se determina su real estado y se confirma la real capacidad y potencia de su calidad, pertenencia y responsabilidad colectiva.

Los informes oficiales de lo que ocurre en cada universidad tratan de reportar lo que metodológicamente sirve al interés del gobernante, pero además cabe en los rankings de competición global, cuya metodología es de estudios cuantitativos sobre la web académica. Las sumatorias de datos de la web aparecen desprovistas de contexto y sentido práctico. Universidades como Harvard, Tokio, Cambridge, Melbourne o Córdoba Colombia resultan medidas por igual, a pesar de las inmensas desigualdades y diferencias no solo de los volúmenes de capital invertido para mantener la vida intelectual y el etos universitario, sino también por las condiciones y





Detalle. Vamos Juntos.  
Acrílico sobre tela. 104 cm x 150 cm 2009

garantías de las que disponen para ampliar las fronteras de las ciencias y las artes y entregar servicios asociados al derecho a la educación, siendo de imprescindible rigor mantener la legitimidad en los modos de decidir y gobernar, entender y respetar a estudiantes, profesores, intelectuales y funcionarios, abordar teorías y valorar el profundo significado de la cultura, el campus y la estética.

Las universidades están expuestas cada vez con mayor intensidad a responder a las exigencias de competitividad y productividad impuestas como nuevas metas propias, cuando son en verdad los nuevos pilares para convertir el derecho a la educación, del cual el Estado es responsable directo e inmediato, en una libertad individual a la que se accede por oportunidades, que libera al Estado de las responsabilidades políticas para garantizarlo e impiden observar asuntos complejos como por ejemplo que la paz de Estados Unidos, Japón, Gran Bretaña o Australia, en cuyos territorios están las llamadas universidades de clase mundial, no se enfrenta a las carencias, problemas y necesidades de una población mayoritariamente empobrecida con el telón de fondo de políticas sin política y una guerra en la que ciencia, el arte y el humanismo de alguna manera son obstaculizados para realizar los compromisos directos que tienen para transformar esta realidad.

## Uso ideologizado de las cifras

Las cifras se han convertido en la lengua oficial de los gobiernos universitarios que usan su capacidad para sobreponerlas por sobre todo lo demás, siguiendo estratégicamente una secuencia piramidal de metas que circulan de arriba hacia abajo en la ruta mercantil trazada por fuera de las mismas universidades para controlarlas totalmente y terminar la privatización en curso. Las cifras son útiles al poder para bloquear los análisis de contexto del estado de las cosas, invisibilizar las causas e impactos que producen e invalidar procesos autónomos.

Orientar ideológicamente las cifras lleva a naturalizar los fenómenos sociales, a ocultar y evitar la comprensión de las graves consecuencias ocasionadas por el asalto a las universidades en sus bienes, conceptos, estéticas y formas de decisión democráticas. Las cifras pasaron a hacer parte de la caja de herramientas del poder político universitario, ya no de poder académico basado en el saber, como instrumento de medición y negación, útil a tres propósitos: gobernar en medio de la ilegitimidad, impedir el reconocimiento del fracaso de sus decisiones, y ocultar las consecuencias previsibles de destrucción programada de lo público.

Las cifras en sistemas de ranking globales sin embargo no resultan favorables, pero se sostienen en su papel ideológico. En conjunto, el país tiene pocas cifras que destacar: en contexto se mantienen los primeros lugares de vergüenza por el irrespeto provocado sobre los humanos y sus derechos y los últimos lugares en asuntos vitales para salir de la tragedia, como educación, ciencia, salud, vías, es decir, de respeto y reconocimiento. La cifra más desafiante del contexto nacional son los siete millones de desplazados forzados. La cifra es contundente, pero el fenómeno social es más profundo, es desestructurante, afecta todo el sistema social. Siete millones de personas indican que a uno de cada siete humanos de este país se le impide vivir con dignidad. La cifra contiene una historia de barbarie y despojo, una geografía de terror y unas estrategias de destierro, de desprecio e inhumanidad total, que impactan en todas las demás variables del sistema social, incluida la educación universitaria, cuya base es la esencia misma de ser joven, su sustancia vital, sus sueños, su realidad, pero también la memoria de lo que somos como país.

Un millón de estudiantes en las universidades públicas es una buena cifra, pero oculta la negación que sufren no menos de tres millones de jóvenes más -cerca de nueve millones asisten al sistema escolar- que carecen de oportunidades como consecuencia del modelo estratificado de universidades de primera, segunda y tercera clase, cuya lucha no es por eliminar brechas y barreras y servir a la transformación de la realidad, sino por parecerse a las llamadas universidades de clase mundial, cuyos contextos carecen de guerra, han superado las altas desigualdades y exclusiones y ven en los jóvenes no a un enemigo interno ni a una presunta amenaza terrorista, sino a un joven que representa una esperanza de cultura, de progreso, de dignificación de la vida. Lo común a las cifras es el modelo de



desarrollo -justamente vetado en las conversaciones de paz que cursan en La Habana entre Estado e insurgencia- que tiene unos mismos responsables políticos que toman las decisiones en todos los ámbitos en los que ofrecen mucho para pocos y nada para muchos.

Con las cifras ideologizadas se impide ver lo real, con ellas se pregonan en todos los informes oficiales que la educación es la prioridad, la base del desarrollo, de la equidad y la justicia, pero materialmente es tratada como problema, como igual son tratados los jóvenes. La naturalización por sobreposición de las cifras hace parte de la manera de pensar y organizar el mundo según el mercado, que produce el fracaso universitario público conforme a su posición de derecho. Al poner a las universidades en competencia, estas son conducidas hacia su derrota como escenarios de conocimiento y son sometidas al escrutinio de los inversionistas privados y sus avanzadas mercantiles que ya las tienen convertidas en centros de servicios y negocios. Al Estado le bastó modificarle su condición de derecho para presentarla como una libertad que se resuelve en el mercado. Al modificar su estructura de derecho humano de carácter colectivo por el de libertad individual, el Estado elimina sus responsabilidades descomponiéndola y dejándola a merced de una competencia en la que está condenada a perder sus capacidades, su identidad, su patrimonio.

Poner a competir a las universidades públicas en marcos de relación de mercado, las debilita. Como paso previo a la quiebra, las desfinancia, las endeuda, las obliga a desprenderse de sus fortalezas intelectuales y heterogeneidad de saberes para dedicarse a perseguir cifras que crecen y decrecen sin contexto, sin compromiso por los impactos científicos y sociales, pero con réditos de poder y beneficios para sus gobernantes. La privatización que se ha afianzado paulatinamente permite controlar conceptos, sentidos, significados, símbolos, no se reduce solamente a asuntos económicos, ya está instalada en la médula de las universidades públicas como la herramienta de la más peligrosa ideología que pone el valor de las mercancías por encima de la vida humana y estaciona la fuerza en el lugar de la razón, como garantía para justificar sus éxitos con la muerte de los otros, incluidas instituciones, ideas, opositores.

En las universidades colombianas la privatización se ha impuesto por vía pacífica, aceptando su autofinanciamiento, saliendo a vender de todo, cupos en las aulas, diplomas, certificaciones, inclusive la extensión que correspondía a la responsabilidad con la sociedad a la que se pertenece e incrementando y poniendo precios a eventos, conferencias, matrículas, y, a la vez, modificando normas de interés colectivo, ajustando al mercado los planes curriculares. Pero, aparte de las vías





pacíficas basadas en imposiciones legales, también ha desbordado sus violencias institucionales, en primer lugar negando o eliminado derechos contenidos en el derecho al trabajo y sus contenidos básicos de igual trabajo, igual salario, ocio, cultura, capacitación, bienestar, tranquilidad laboral, eliminación de barreras de discriminación, respeto a las libertades de expresión, de protesta, de pensamiento, de cátedra, de investigación. Más grave aún en el proceso privatizador es la persistencia de métodos, mecanismos y procedimientos que contienen la sustancia política de las estrategias de seguridad nacional y de guerra preventiva y que ha introducido en las universidades fórmulas de vigilancia sin límite, militarizaciones, espionajes, amenazas encubiertas con obligaciones y usando excusas propias del orden público para introducir la guerra contra adversarios intelectuales y oponentes sindicales o estudiantiles, para aplicar de manera selectiva técnicas de represión y terror con el encargo de eliminar colectivos, desterrar, aislar, obstaculizar el pensamiento crítico, la enseñanza con contexto y las ideas basadas en teorías que ponen en evidencia los fracasos del modelo de gestión privada y el control político de centros de mando externos a las universidades.

Las cifras de profesores, estudiantes y trabajadores asesinados (informe corporación Arco Iris, [elheraldo.com](http://elheraldo.com)), detenidos desaparecidos, judicializados y amenazados, se cuentan por decenas, lo que evidencia que la barbarie con anuencia o participación del Estado colombiano de la mano de estructuras paramilitares llena de vergüenza el lugar que parecía sagrado para hacer de la inteligencia el bien supremo que garantiza avanzar hacia la vida con bienestar, resolver las diferencias con el diálogo y elevar las libertades. El temor instalado en las universidades supera cualquier situación ocurrida en los países que tienen sus universidades en los 500 primeros lugares en los rankings globales.

### Asalto final de público a privado

Hace dos décadas que el sistema empresarial privado que se instaló en las universidades públicas distribuye la ideología neoliberal y entorpece la solución a problemas estructurales, pero conservando el cascarón público mediante el uso de los principios originales adaptados a la gestión privada que los hace inservibles con fórmulas de organización, gestión, vigilancia y medición, que eliminan la construcción colectiva, la universalidad y heterogeneidad del conocimiento, el respeto por las ideas, el sentido ético y la defensa de la humanidad.

Los hechos crecientes creados con bases de mercado resultan contundentes, aunque no resisten el análisis social, político o humano. Las metodologías utilizadas no son neutrales, ponen los medios en el lugar de los fines y ocultan los crecimientos negativos que degradan derechos y socavan la ética y la legitimidad que son pilares de lo público. La privatización en la fase final del asalto a lo público impone el concepto y las prácticas de la seguridad nacional, en cambio de preocuparse por ampliar y garantizar libertades. En lugar de solución a las desigualdades laborales, repite

contratos precarios a profesores, funcionarios y trabajadores. En vez de superar los huecos fiscales y la desfinanciación estructural, aumenta la autofinanciación. Lejos de proponerse ganar en legitimidad, los gobiernos crean nuevas brechas entre academia y administración que sellan con autoritarismo y restricciones. No fortalecen las capacidades y la riqueza del libre pensamiento, por el contrario, promueven sumisión y adhesión política.

La ideología neoliberal invalida el análisis por las causas, resalta las consecuencias y omite argumentar sobre las razones con las que entiende que más corresponde a mejor o por qué la calidad tiene que ser un asunto necesariamente basado en indicadores. La realidad estructural muestra la naturaleza de la universidad pública hondamente debilitada, a riesgo de perder rápidamente lo poco que queda de su existencia pública, lo que no significa desaparecer. En un país todavía en guerra, sin políticas para jóvenes y estos convertidos en problema, de cinco que debieran entrar a la universidad pública, solamente uno ingresa, y de cada cinco que entran, dos deben retirarse por razones económicas, sociales, políticas, culturales, es decir, son excluidos del sistema. De cada tres profesores, solo uno tiene estabilidad laboral y dos permanecen con contratos temporales precarios sin garantías de estabilidad, permanencia y expresión. Iguales cifras y condiciones se reproducen con funcionarios y trabajadores, pasando de la lógica de nóminas paralelas a nóminas en triple carril. Los salarios de los profesores permanecen muy por debajo de sus pares de otros países, y de cada tres, uno realiza alguna actividad de investigación con carencia de condiciones y garantías que suma a indicadores de ranking pero no crea impactos sociales de transformación. La docencia es reproductiva, basada en número de asignaturas y horas clase desde hace cinco décadas. Los recursos presupuestales procedentes de la nación decrecen y son insuficientes, lo que empuja a cubrir la desfinanciación estructural con créditos externos, compitiendo con posgrados de régimen privado, ampliando la demanda o vendiendo, incluso, su autonomía.

Los gobiernos imperantes no parecen oír, ver, ni sentir la cotidianidad de las universidades por las que hacen lo que sea para gobernarlas. Pero no es un problema de indiferencia, es que su lógica, su política, sus actuaciones son así, en cuanto hacen de mandaderos del capital del que también se benefician por ese aparente no hacer. Allí son frecuentes los obstáculos a la vida intelectual, el estrés laboral, las enfermedades físicas y mentales producidas en el ejercicio laboral, las estigmatizaciones, persecuciones, exclusiones, hostigamientos, intimidaciones y discriminaciones a estudiantes, profesores y trabajadores, sobre quienes también ocurren montajes judiciales, asesinatos y destierros. Hay protestas frecuentes violentamente reprimidas con saldo de estudiantes mutilados, encarcelados y muertos. Hay impactos negativos por la presión para cumplir metas y aumentar cifras, afectaciones por contratos sin garantías laborales e intervenciones abyectas de sectores y partidos políticos por el control del aparato institucional. Son evidentes las injerencias externas sobre la autonomía, la dictadura presupuestal que ejerce el

Estado, la pérdida de condiciones de calidad académica, el hacinamiento en aulas y oficinas, la destrucción de la estética universitaria, la conversión del campus en zona franca, las disputas por micropoderes mafiosos de pequeños mercados de alucinógenos y padrinzos para ocupar cargos, la indiferencia con los jubilados, que los lleva al olvido. Las palabras y la voluntad de poder son convertidas en verdades irrefutables y retransmitidas por las oficinas de propaganda oficial, que siguen las reglas de la creación de noticias favorables, desinformación, veto y eliminación de voces ajenas al grupo en el poder. Los actores del proceso académico lanzados a la periferia se hacen receptores pasivos de informes parciales emitidos en comunicados de restringida y casi clandestina circulación, en pliegos de peticiones o en denuncias públicas debidamente respaldadas por voceros legítimamente constituidos en organizaciones gremiales o estudiantiles, que deben enfrentar también la aparición de panfletos de información y tergiversación oficial, anónimos y descalificadores, que suelen suplantar y crear confusión.

No hay evidencia de fracasos académicos basados en el hacer intelectual, pero sí esfuerzos para provocarlos y afianzar la percepción social de que la universidad pública es costosa para la nación, ineficiente e incompetente, y una vez desvalorizada la condición intelectual y la importancia institucional, vender barato lo que quede. Para el mercado, la ciencia es una mercancía; las universidades son empresas; los estudiantes, clientes; los profesores, funcionarios y subalternos; los funcionarios, intermediarios políticos; y los directivos, gerentes omnipotentes que deciden y mandan de manera vertical y jerárquica sin dejar opción para disentir, menos para oponer o resistir. Sin embargo, mientras se consuma el asalto total, quien gobierne la universidad pública de hoy sin contar con su concepción del mundo, tiene la responsabilidad ética y política de preservarla del acecho del interés privado, salvaguardarla de la corrupción, el maltrato, la discriminación y la tiranía y fortalecerla como el lugar preciado de la vida, no de la guerra ni la muerte, ni tampoco servir como medios o agentes liquidadores para llevarla al reino de lo privado que la aniquila.

## Universidad sin agenda de Estado: el fracaso convertido en éxito

Los anuncios de respeto y garantías para fortalecer la universidad pública hacen parte de la retórica política, pero no de la agenda del Estado. Los presupuestos y las garantías materiales no demuestran el interés real por resolver los problemas de fondo que las saquen del riesgo de ser arrolladas por las carencias, ni por hacer efectivo el derecho humano a la educación. No hay política universitaria, lo que existe es una suma de discursos ideologizados y estrategias que debilitan a las universidades, favoreciendo el paulatino desmonte de la autonomía, y las avanzadas del capital que sabe cómo ponerle al mercado los derechos que le quita a los universitarios.

La inexistencia de política pública es un asunto de estrategia política, no es producto del olvido o la indiferencia de los funcionarios de turno. Las respuestas, por tanto, hay que buscarlas en el campo de las tensiones políticas de poder, y los cambios deben ir a la raíz del sistema universitario que exige desde democratización de las decisiones hasta reinvención de su papel científico y cultural y la redefinición de sus actores. Las luchas que se gestan en sus estamentos profesoral, estudiantil y de trabajadores, exige enfrentar tanto a las técnicas de dominio como a los responsables del estado de riesgo en que están, quienes encarnan la mezcla entre clase política e inversionistas privados decididos a convertir a las universidades públicas en sus protectorados.

Las universidades públicas acogen a uno de cada cuatro jóvenes, otro entra al ámbito privado y dos quedan a merced de un contexto de guerra con conversaciones de paz, desigualdades, violencias, corrupción y prosperidad de inversionistas sin sentido de humanidad, mientras el Estado afianza los controles y vigilancias para los jóvenes y ofrece nuevas normas de poca legitimidad para cada problema universitario que se acumula sin ser resuelto y llama a portarse como empresas preocupadas por atender con eficiencia a clientes, proveedores y acreedores y a certificar sus productos. Las universidades son convocadas a entenderse menos como universidades y más como instituciones de educación superior (IES), donde sus identidades se pierden en una confusa y extendida categoría reproductora de fórmulas empresariales que sustituyen el carácter de las instituciones públicas y, por supuesto, debilitan el espíritu colectivo, democrático y popular de las universidades al dedicar sus mejores esfuerzos a responder los requerimientos impuestos por una formalidad basada en herramientas de gestión privada, que convierten a los medios en fines y arrastran el modo público a modo privado.

El medio más común de arrastre al modo privado ha sido el sacralizado nuevo concepto de calidad, amplio y vacío, del que emana la práctica llamada acreditación, que encontró su mejor justificación en el desborde de la creación consentida de instituciones y programas privados que en dos décadas se quintuplicaron, y en la racionalidad empresarial y mercantil que entró a las universidades públicas socavando su legitimidad mediante discursos de competitividad predatoria, eficiencia y autoritarismo, a cuya sombra el déficit económico estructural alcanza los 13 billones de pesos y el desmonte de derechos logra su máxima victoria, a la par con cooptaciones, fragmentaciones, divisiones entre estamentos, separación de intereses entre directivos y académicos y aumento de controles, mientras lo privado en su lógica de consumo individual conserva sus posiciones con o sin calidad.

Han pasado casi dos décadas de acreditación tratando de seguir acriticamente la ruta de la Declaración de Bolonia firmada en 1999 por 29 Estados europeos que acordaron organizar un sistema de educación superior tendiente a mejorar el empleo (para los europeos) y la movilidad ciudadana y aumentar la competitividad



internacional bajo la condición de no restar autonomía a las universidades, ni homogeneizar o estandarizar. Los logros en Colombia por la carencia estratégica de política, salvo el desmonte de lo público que es la principal política neoliberal, no han respondido a lo previsto y podría hablarse del contundente fracaso de un modelo de gestión de la educación y la ciencia, conforme a sus propósitos. Se ha bloqueado la autonomía, la hegemonía y la legitimidad a las universidades públicas, prevalece la homogeneización, se aceleró la estandarización, el control vigilancia, se fortaleció el autoritarismo y las barreras a las libertades de cátedra, investigación, opinión y pensamiento, hay menos democracia universitaria, igual deserción estudiantil, débiles avances en ciencia y nada de nuevos empleos ni competitividad internacional.

Con datos web del CNA a septiembre de 2014, de 32 universidades públicas solo 13 aparecen acreditadas de alta calidad y apenas el 10 % de las otras 300 del sistema de IES. De los varios miles de programas de pregrado que florecieron con la Ley 30, solo 1739 aparecen acreditados, y únicamente 16 de los cerca de mil posgrados. Lo esperado no llegó, los puestos de trabajo en el Estado están bajo control de los mismos patronazgos políticos que hoy controlan las decisiones universitarias y los inversionistas atienden solo sus necesidades de explotación, el país no entró en los 400 primeros lugares en ranking globales y la ciencia no encuentra espacio real, aunque se sobredimensione, multiplique y se empeñe en confundir indexación con calidad y utilidad del conocimiento.

Al sistema, que estaba compuesto por 132 universidades, le sumaron otras 215 entidades agrupadas en la franja difusa de instituciones tecnológicas y técnicas (solo 5 acreditadas), la mayoría propiedad de inversionistas con poco interés por la ciencia, la cultura o la educación como derecho y en cambio mucho interés en hacer capital sin campus ni condiciones de calidad; además no hay herramientas efectivas para tratar las franquicias educativas y las fórmulas de estudio y graduación on line. Algunas IES se abren espacio en el mercado con contratos laborales indecentes a profesores y funcionarios y con jóvenes clientes condenados a recibir deficitarias retransmisiones de información, en edificios de apartamentos con reducidas salas tipo call center, wifi controlado por minutos, compuertas de acero y hombres de uniforme de alguna empresa semimilitar privada, perros de presa y cámaras espías apuntándole a sus sospechosos clientes, de los que viven. Son empresas que invocan la autonomía para extenderse, refundar y acumular riqueza, contrariando la concepción de autonomía para fortalecer las libertades y formar la inteligencia crítica del país. Con acreditación o no, las IES tienen el respaldo legal y se benefician de normas acomodadas para que todo siga igual. El Estado eliminó el sentido colectivo de evaluación de pares y modeló al actor llamado par académico, encargado de acreditar la calidad, y aunque no representa al intelectual, aparece con la pretensión de ser entre iluminado y experto, para el que las IES ofrecen galas, conciertos, ofrendas y vítores, recitan himnos, misiones, visiones, preparan

conductas colectivas transitorias, modifican prioridades, modelan una realidad temporal y hacen un lobby que se sostiene en el borde entre ética y corrupción.

No más del 10 % de universidades privadas representan la sobresaliente excepción. La extensa mayoría abolió hace tiempo el sin ánimo de lucro y avanzan con o sin acreditación a expensas de la debilidad de lo público y bajo el disfraz de otra calidad basada en el cumplimiento de normas expedidas por organismos privados que miden indicadores y resultados de metas, como ISO, IAF, UKAS, UL, Icontec, creando confusión entre lo sustantivo que es el conocimiento y la certificación de la gestión administrativa, que es lo adjetivo, ya que allí no se produce una valoración por exposición, sea ante comunidades científicas o colegiaturas académicas, sino ante reglas de gestión administrativa. La acreditación, como se ha llevado, en cambio de asegurar la calidad y monitorear el saber y sus aplicaciones, ha servido como estrategia de competencia para acelerar el espíritu privado en el entorno universitario, influenciando las teorías y argumentos que circulan, lo que se lee en colectivo, lo que se dice y como se dice, el modo de poner sentido a lo real y lo simbólico, el arte, la estética de sus campus, las maneras de guardar la memoria, las interacciones e interrelaciones entre actores y estamentos y con los modos de luchar, gestionar, gobernar y hacer democracia. Acreditación sin legitimidad ni salvaguarda del espíritu crítico, científico, ético y cultural universitario, es pura formalidad en beneficio de la política de desmonte de lo público.



Detalle. Primeras obras de una mañana de Domingo.  
Acrílico sobre tela. 73 cm x 270 cm 2009